

[Cimes c/ AFIP - DGI](#)

**Voces:** TRIBUTARIO - EXENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - ASOCIACIONES Y FUNDACIONES - ASOCIACIONES - ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

**Partes:** Cimes c/ AFIP - DGI s/ dirección general impositiva

**Tribunal:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

**Sala/Juzgado:** II

**Fecha:** 27-feb-2007

**Cita:** MJ-JU-M-11579-AR | MJJ11579 | MJJ11579

### Sumario:

1.-Debe confirmarse la denegatoria a la solicitud de exención al impuesto a las ganancias efectuada por la actora, que se basó en que la actora no era una entidad de bien público, si del propio estatuto de aquella surge que aun cuando no persigue un fin de lucro propio, contribuye al fin de lucro que persiguen sus asociados, dado que ello denota que el bien común no es su objetivo.

2.-La circunstancia de que un ente realice una actividad lícita y socialmente útil no significa que constituya, en los términos de la ley del impuesto, una entidad de bien público. En efecto, las personas pueden realizar cualquier actividad lícita (útil o no), sin que ello signifique que su fin específico sea el bien común.

#### Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de dos mil siete reunidos al Acuerdo los señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer sobre el recurso interpuesto en los autos Nº 41.592/1999 "Cimes c/AFIP -DGI- S/Dirección General Impositiva" contra la sentencia obrante a fs. 345/352

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Damarco dijo:

1. CIMES cuestiona la sentencia de fs. 345/352 porque confirmó la resolución de la AFIP que le negó la **exención** que solicitó en los términos del inciso f) de la ley del impuesto a las ganancias.

2. Si bien en algún momento CIMES gozó de la **exención** (Res. de la Sección División y Recursos "A", de fecha 18 de julio de 1979, fs. 24/27), lo cierto es que una nueva resolución de la AFIP la denegó (Res. de la ex División Jurídica "C", de fecha 24 de octubre de 1997, confirmada por la Res. 351 del Jefe del Región Nº 3, de fecha 11 de agosto de 1999, véase fs. 51/58).

3. El organismo recaudador y la sentencia consideraron que los fines de CIMES no encuadraban en la exigencia de la mencionada norma del impuesto a las ganancias.

4. En las presentaciones que la demandante efectuó en autos, se advierte su preocupación por demostrar que no realiza actividades comerciales e industriales, que se mantiene con las cuotas de sus asociados, que en caso de disolución sus bienes se destinarán a una entidad de bien público y que cumple una función social relevante en materia de medicina laboral.

5. La cuestión podría resolverse señalando que la recurrente no rebate adecuadamente la argumentación expuesta por la juez al resolver. Sin embargo, parece necesario efectuar algunas consideraciones para aclarar conceptos que continuamente aparecen confundidos en los planteos similares al que se analiza en autos.

6. En este aspecto no puede dejar de señalarse que la circunstancia de que un ente realice una actividad lícita y socialmente útil no significa que constituya, en los términos de la ley del impuesto, una entidad de bien público. En efecto, las personas pueden realizar cualquier actividad lícita (útil o no), sin que ello signifique que su fin específico sea el bien común.

De hecho en la sociedad existen personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades lícitas y sin embargo por ello no son entidades de bien público. En efecto, las personas que realizan lícitamente actividades de carácter económico en su propio beneficio, indudablemente que persiguen fines útiles para ellos y, eventualmente, para la sociedad. Pero ello no es suficiente para que se las considere como entidades de bien público.

7. La actora es una asociación civil denominada "Control Integral, Metódico y Específico de la Soda" (CIMES) y tiene un objeto muy definido y muy claro. Si se lee con detenimiento su Estatuto (fs. 28/371) podrá advertirse que sus fines son la creación de organismos internos para el asesoramiento integral para sus asociadas, tendientes a resolverles problemas de orden técnico industrial (en lo que respecta a la forma de adquisición, empleo y organización funcional de la maquinaria necesaria para el mejor desenvolvimiento y producción de sus fábricas de soda en sifones), económico (relacionadas con una mejor y más racionalizada producción, brindándoles la oportunidad de lograr una producción de alta calidad, higiénica, controlada, de bajo costo y de colocación fácil y dinámica), orden promocional y publicitario (creando los organismos necesarios para un eficaz programa de promoción y de amplia publicidad de los métodos de elaboración y distribución del producto), los problemas que se les plantean en materia de medicina del trabajo con obreros y empleados y sus problemas de orden jurídico legal y administrativo contable (arts.1/3).

Asimismo, el Estatuto indica que sus asociados son todos los industriales de la soda en sifones de la República Argentina que tengan fábricas en funcionamiento, ya se trate de personas físicas o jurídicas (art. 4).

De lo expuesto, resulta que CIMES no persigue un fin de lucro propio, sino que contribuye al fin de lucro que persiguen sus asociados. El bien común no es su objetivo, ni ha sido creado para ello. Su creación se justifica en función de la actividad de sus asociados y para ellas fue creada. No puede dudarse que las actividades que realiza, entre ellas, la promoción y la publicidad tiene un solo objetivo, servir a los intereses de carácter económico de sus asociados.

8. Las comparaciones que se efectúan en el escrito de expresión de agravios no son suficientes para convencer de lo contrario. Es cierto que existen **fundaciones** y otros entes que persiguen el bien común y que realizan algunas actividades,

como espectáculos públicos, para obtener recursos. En ciertos casos, ellas son la fuente más importante de sus recursos. Es cierto también que se reconoció a dichos entes la **exención** en el impuesto a las ganancias que reclama para sí la demandante. Pero se trata de situaciones distintas. En dichos supuestos, no se discutió si la entidad poseía fines de bien público o no. Lo que estaba en discusión era si la realización de aquellas actividades para obtener recursos desnaturalizaba su objeto. Y se sostuvo que no, porque la obtención de recursos para los fines de su creación era lo relevante. Así lo sostuvo esta Sala, al resolver la causa "Asociación Pro Ayuda de Niños Atípicos" (sent.del 4 7 1995 ), oportunidad en que se dijo que la limitación establecida por las normas no podía tener otro alcance que el de impedir la obtención de recursos por los mencionados medios cuando se desvirtúe el fin de la asociación, porque en consideración a él se otorgó la **exención** y, por ello, se concluyó que las entidades de beneficio público art. 20 inc. f) se encuentran habilitadas, mientras no se desnaturalice la finalidad de su creación y el fundamento de la **exención** de que gozan, a realizar actividades que semánticamente puedan estar comprendidas en la expresión "espectáculos públicos" con la finalidad de obtener recursos para la realización de sus actividades de bien público.

Por otra parte, en relación a la causa resuelta por la Corte Suprema de Justicia, el 22 de febrero de 2005, al decidir en los autos "Servicios de Transporte Marítimo de Argentina Brasil c/Fisco Nacional (DGI) s/Dirección General Impositiva" (S.1376.XXXVIII), tampoco caben las comparaciones porque se tratan de entes distintos. En esa oportunidad, en el dictamen del Procurador Fiscal al que se remitió la Corte Suprema al resolver, se puso de manifiesto que el Estatuto de la entidad binacional de "Servicios de Transporte Marítimo Argentina Brasil" tuvo su origen en el acuerdo sobre transportes marítimos concluido entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil que impuso para ser ejecutado, la condición de que los organismos marítimos competentes autorizaran a los armadores a constituir una "Conferencia de Fletes Argentina Brasil" y que se incluyeran en las disposiciones de su estatuto penas (desde la advertencias hasta la desafiliación) para los incumplidores. Asimismo, en el Estatuto se enunció la finalidad de desarrollar actividades que persiguieran el intercambio comercial ente ambos países y el perfeccionamiento y expansión de las flotas de sus líneas marítimas.

Por otra parte, dicha entidad ejerce el poder de policía marítimo. Lo expuesto es suficiente para resaltar que en el contexto expuesto son obvios los fines de bien público de la aludida asociación y que dicha claridad, en los términos de la ley del impuesto a las ganancias, excluye la posibilidad de comparar y asimilar a CIMES con la entidad binacional.

9. Que a fin de tratar el recurso deducido contra los honorarios regulados en el decisorio de fs. 345/52, cabe considerar la naturaleza de las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones, el reclamo articulado por la actora, así como la entidad y amplitud del trabajo encomendado al perito contador. En tales condiciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 6º y ccctes. del decreto 16638/57 y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que correspondan a los restantes profesionales que han intervenido en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros y art. 10, segundo párrafo de la ley 24.432), corresponde confirmar, en lo que fue materia de recurso, los honorarios regulados en favor del perito contador Miguel Ángel Abbruzzese .

10. Por las consideraciones expuestas, voto para que se confirme la sentencia apelada, con costas (art. 68 CPCCN) y para que se confirmen, en lo que fue materia de recurso, los honorarios regulados en favor del perito contador Miguel Ángel Abbruzzese .

La Dra. María Inés Garzón de Conte Grand adhiere al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE: 1) confirmar la sentencia apelada, con costas (art.68 CPCCN) 2) confirmar, en lo que fue materia de recurso, los honorarios regulados en favor del perito contador Miguel Ángel Abbruzzese.

Por los fundamentos expuestos por la mayoría y minoría en la causa "Scotti Norberto Carlos y otros c/ Estado Nacional s/ Empleo Público" del 29 VI 93 entre otras, el importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Publ. de Abog.", del 16 de julio de 1996). ASI SE DECLARA.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. La Dra. Marta Herrera no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109(ref:LE G4344.109) del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.